

## El sector porcino se moviliza este jueves por el cierre del 80% de las plantas de purines

Noticias

La reforma energética que estudia el Gobierno llevaría a la pérdida de rentabilidad de dichas instalaciones

El sector del porcino se movilizará en siete municipios este jueves para protestar por el **cierre del 80 % de las plantas de tratamiento de purines en los últimos días por la reforma energética** que estudia el Gobierno y que llevaría a la pérdida de rentabilidad de dichas instalaciones.

La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anrogapor), la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han explicado en Madrid en rueda de prensa la situación generada tras conocerse el borrador del Gobierno sobre reforma energética. Las concentraciones se celebrarán en Valladolid, Lleida, Vic (Barcelona), Toledo, Murcia y Langa de Duero (Soria) por la mañana y en Vilches (Jaén) por la tarde.

Se ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la que exponen la situación y piden una reunión de urgencia. El Gobierno tiene pendiente de aprobación un Real Decreto y una Orden Ministerial sobre Renovables, Cogeneración y Residuos que plantea una reducción del 40 % de la retribución económica que recibían estas plantas, lo que en su opinión "hace inviable su continuidad".

La normativa se aplicaría con carácter retroactivo desde el 13 de julio de 2013, lo que ha provocado ya el cese de actividad del 80 % de las 29 plantas de tratamiento de purines. Según el sector, esto lleva a "un impacto directo en las explotaciones de porcino", que utilizan estas plantas de gestión para tratar sus excedentes de purines "a un coste razonable".

Más de 3.000 explotaciones gestionan parte de sus purines en estas instalaciones -la mayoría en Cataluña, Aragón y Castilla y León-, con lo que logran disminuir el impacto ambiental y contribuyen a la generación de energía.

El director de Anrogapor, Miguel Ángel Higuera, ha detallado que las plantas tratan cada año entre 2 y 2,5 millones de toneladas de subproductos del cerdo, cerca de un 3 % del total de la producción. Higuera ha indicado que el cierre de las plantas puede llevar a un descenso del 2 % de la producción porcina y podría generar un impacto económico negativo superior a los 300 millones de euros. El "principal" problema es, a su juicio, que "muchas" granjas "vinculan su producción" a que una "parte" de la producción de excrementos puedan ser tratados en estas instalaciones. Ha alertado de que los ganaderos están almacenando los purines de los últimos días en las balsas, pero que llegará un momento en el que estén al 100 % de su capacidad, lo que puede obligarse a tener que verter purines en el campo, que entra en conflicto con la directiva europea de emisiones industriales.

Por su parte, el presidente de ADAP, Josep Capdevila, ha afirmado que estas plantas llevan 10 años funcionando "de manera correcta" y ha recordado que fue en 2007 cuando se pactó con el Ejecutivo que tuvieran una rentabilidad mínima del 7 %. "Con esta derogación del Real Decreto 661, eso se ha quebrado y la situación se ha complicado con las Órdenes ministeriales que prevén la regulación futura", ha apuntado Capdevilla. Desde ADAP, han exigido que el Gobierno "reconsidere este texto inicial y valore la especificidad que tienen estas instalaciones".

El presidente de la sectorial del porcino de Cooperativas Agro-Alimentarias, Ramón Armengol, ha pedido que se rectifique el borrador. Armengol ha incidido en el valor de estas plantas que nacieron hace 15 años para responder a "una necesidad" que tenía la ganadería intensiva y que llevó a que "empresas especializadas en tratamientos de residuos invirtiesen en el mundo rural".

El secretario del porcino de Asaja, Isidro Villaescusa, ha remarcado su "gran preocupación" y que confía en que la situación se solucione cuanto antes. "Debe solucionarse a partir de mañana, porque es una situación muy grave", ha resaltado Villaescusa.

Desde COAG, el responsable del sector porcino, Jaume Bernis, ha remarcado la unidad del sector en este asunto, lo que subraya "lo grave de la situación". Para Bernís, el Gobierno "deja al sector" ganadero con el cierre de las plantas en una "ilegalidad medioambiental", en alusión a la posibilidad de que tengan que tirar los purines al campo.

El responsable de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha opinado que la futura norma puede provocar "casi el fin" del sector porcino "de un plumazo". Santalla ha "lamentado" que el Ministerio "no haya informado previamente a Industria" de una decisión "tan errónea".

Redacción